

Lo que no te contaron sobre Venezuela

ISMAEL SÁNCHEZ CASTILLO*

Diputado de IU en Adelante Andalucía en el Parlamento de Andalucía



El pasado 5 de enero de 2021 se llevó a cabo el histórico acto de instalación de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la designación de su Junta Directiva para el período constitucional de 2021 a 2026, tras las elecciones celebradas el 6 de diciembre de 2020 y en las que se eligieron 277 diputados y diputadas.

En estos comicios participaron 14.400 candidatos de 86 partidos políticos, y el Gran Polo Democrático que lidera Nicolás Maduro, alianza en la que se integra el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), se impuso con un 67,6 % de los apoyos, arrasando en las 24 listas y 87 circunscripciones electorales. Esta abrumadora mayoría chavista permite, en un escenario muy complicado caracterizado por una profunda crisis económica y una estabilidad política necesaria para el blindaje de la sanidad, la educación, la seguridad social y el crecimiento económico.

Cabe recordar que cerca de 1.500 observadores internacionales y 300 representantes de más de 34 países acompañaron la celebración de estas elecciones.

El sistema electoral venezolano es quizás de los más avanzados democráticamente hablando, gracias al trabajo del Consejo Nacional Electoral (CNE). En estos comicios se han elegido al 52 % de los diputados a través de la representación proporcional, es decir, listas electorales, y al 48 % por voto personalizado, es decir, de forma nominal directa. Un modelo, sin duda, muy proporcionado y de máxima garantía democrática. Lo que parece que molesta o que no se

* Ismael Sánchez Castillo es diputado en el Parlamento de Andalucía. Se organiza políticamente en Izquierda Unida y en el Partido Comunista de España y ha asistido como invitado internacional al acto de instalación de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2021-2026.

acepta es que de 25 elecciones en los últimos 20 años el chavismo haya ganado 23, con distintos porcentajes de participación y niveles de apoyo, pero 23 victorias incuestionables.

A escasos días de la conformación de la nueva Asamblea Nacional, la oposición ilegítima, la que no se presentó a las elecciones, intentó aprobar, de forma retorcida, una reforma para prorrogar el mandato de la anterior composición con el objetivo de mantener a Juan Guaidó como ficticio presidente. Afortunadamente el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela ha declarado nulo este disparate antidemocrático, y la propia Unión Europea a través de Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha declarado no reconocer a Guaidó como «presidente interino».

De este modo, el martes 5 de enero de 2021, a las 11 de la mañana y según lo establecido en la Constitución de la República, se procedió en Caracas al acto de instalación de la nueva Asamblea Nacional, siendo elegido Jorge Rodríguez, y a propuesta de Diosdado Cabello, en nombre del Bloque de la Patria, nuevo presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. El resto de la Junta Directiva la conforman Iris Varela, Didalco Bolívar, Rosalba Gil e Inti Hinojosa como primera vicepresidenta, segundo vicepresidente, secretaria y subsecretaria, respectivamente.

El acto estuvo respaldado por una importante representación internacional formada por cargos electos de parlamentos y congresos de una veintena de países y autoridades de 23 embajadas y de varios organismos internacionales, entre ellos ACNUR, FAO o PNUD de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Bloqueo económico y comercial

La nueva situación política debería, de forma natural, conllevar un cambio en la política injerencista internacional (es pretencioso el término, porque realmente hablamos de Estados Unidos, algunos países europeos y el llamado «Grupo de Lima») y pasar a respetar la soberanía popular desde un papel más constructivo. Pareciera lógico que estos países retomaran la senda de la mediación y el diálogo en busca de la paz. Me temo que no será así.

Las fracasadas políticas de sanciones o de no reconocimiento deben finalizar ya. Ha llegado el momento del entendimiento, de la colaboración. Las acciones coercitivas y desestabilizadoras en el país desde el golpe de Estado en abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez no han cesado y hoy, más que nunca, carecen de justificación alguna, por no hablar que son contrarias a la Declaración de los Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas.

El bloqueo económico y comercial que ha impuesto Estados Unidos a Venezuela y que ha contado con el inexplicable seguidismo de buena parte de la Unión Europea tiene, entre otras consecuencias, la incapacidad de importa-



ción de insumos como alimentos y medicinas, en plena pandemia mundial de la covid-19, por no hablar de que el 99 % de los ingresos del país por transacciones en hidrocarburos u otros bienes se han visto desaparecidos.

Afortunadamente, y tras la nueva etapa que se presenta, hay margen para la ruptura del bloqueo o, en caso contrario, para neutralizar los efectos del mismo. La principal herramienta jurídica con la que cuenta el Gobierno que preside Nicolás Maduro es la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos del Pueblo Venezolano, que ofrece posibilidades de inversión a capitales nacionales o extranjeros en condiciones de seguridad. Esta ley está pendiente de desarrollarse y será una de las tareas urgentes a asumir por la Asamblea Nacional.

El fortalecimiento y aumento de la producción es una tarea necesaria, ya que, en los últimos años, se ha perdido el 65 % de la capacidad productiva; el rescate empresarial y el desarrollo industrial son otros de los retos a asumir y que permitirán crear riqueza y realizar una distribución justa, lo que, a su vez, conllevará una bajada de la elevada inflación que existe en estos momentos.

En este apartado, procede recordar que hasta la «declaración de guerra económica» el 70 % de los impuestos recaudados en Venezuela provenían del petróleo y el 95 % de las divisas ingresadas, algo que permitía el mantenimiento de todos los servicios públicos o que tuviera el segundo salario mínimo más alto de toda América Latina.

En estos momentos, hay más de 40.000 mil millones de dólares, pertenecientes a la República Bolivariana, retenidos en cuentas bancarias en todo el mundo, algo que está deteriorando enormemente la economía de este país y que dificulta el mantenimiento de los servicios sociales, la educación, la salud... los servicios básicos, pese a que el Gobierno que preside Nicolás Maduro esté haciendo serios esfuerzos por mantenerlos.

De esa cantidad, 4.000 millones se encuentran depositados en bancos europeos, de los que igualmente no pueden disponer, además de las reservas de oro, unas 30 toneladas valoradas en 2.000 millones de dólares, retenidas en el banco de Inglaterra.

Es fundamental que España tenga un papel más constructivo en este «conflicto» pasando de los gestos a hechos sustantivos, porque Europa mira a Venezuela con los ojos de España y, por tanto, su postura es determinante para acabar con la política de sanciones económicas. De no ser así, la economía venezolana está preparándose para resistir y evolucionar: la economía digital está en plena expansión y el presidente Maduro ya ha anunciado que la meta es terminar 2021 «con una economía totalmente digital». En este sentido, la criptomoneda, en pleno auge en el país, va a tener un papel fundamental al no tener vinculación alguna con el dólar.

Además de la retención de fondos económicos en cuentas bancarias, procede mencionar la usurpación por parte de Guaidó como supuesto «presiden-



te interino», a las órdenes de Estados Unidos, de la empresa Citgo Petroleum Corporation, el mayor activo petrolero de Venezuela en el exterior, con 6 refinerías y más de 8.000 estaciones de servicio, y de Monómero Colombo Venezolanos, filial de la petroquímica estatal Pequiven, que posee cerca de la mitad del mercado de fertilizantes en Colombia y que opera desde sus sedes en Barranquilla y Buenaventura. Ambas empresas son patrimonio estatal y pertenecen, por tanto, a la República.

En resumen, entre la confiscación de empresas, el bloqueo a cuentas bancarias, la retención de las reservas de oro y la imposibilidad de venta del crudo por la política de sanciones podríamos estar hablando de unas «pérdidas» de más de 136.000 millones de dólares.

Fin de una etapa negra (2016-2020)

La Asamblea Nacional se instaló en paz, como ya se ha expuesto, el 5 de enero de 2021, tras varios planes de boicot; el último un sabotaje, en la madrugada anterior, en la principal central hidroeléctrica, denominada Simón Bolívar y ubicada en Guri, estado Bolívar, que aprovisiona más del 75 % de la electricidad de Venezuela.

El Gobierno bolivariano de Venezuela ha recibido centenares de ataques terroristas por parte del imperialismo norteamericano y sus aliados con el objeto de derrocar al chavismo y tener vía libre para la esquilma de los recursos naturales, hidrocarburos del país.

Desde que se instalara en enero de 2016 la Asamblea Nacional, con casi dos tercios de los votos de la derecha, el nivel de agresión y entreguismo a los intereses de Estados Unidos, que canaliza su agresión imperialista a través de una serie de personas como Guaidó o Leopoldo López, se ha visto acrecentado. Esta es la segunda vez, tras las elecciones de 2007, que se proponía una reforma de la Constitución en la que la oposición gana.

Esto sucedió así porque todos los grupos de la oposición estaban unidos, con un capital político considerable, y la situación económica del país era crítica, fruto de la guerra económica, que provocó un desgaste moral del pueblo importante. En estos últimos cinco años la oposición se ha fragmentado y dividido entre sí. El gran error fue pensar que con esa posición de fuerza en la Asamblea Nacional se podría dar un golpe de Estado y tomar el poder político haciendo desaparecer al chavismo, algo del todo imposible en Venezuela.

Desde el desconocimiento de las instituciones, la acción política no se desarrolló haciendo valer su mayoría en la cámara legislativa, sino que valoraron la proposición de diálogo del Gobierno revolucionario como una muestra de debilidad e intentaron derrocar al presidente legítimo de la República.

Hay que recordar que hace cinco años, en el mismo acto de instalación de la Asamblea Nacional, el presidente nombrado, Henry Ramos Allup, anunció



que en el plazo de seis meses derrocaría a Nicolás Maduro y a todo su Gobierno como prioridad política de la cámara legislativa, uso de un poder democrático para tomar otro. ¿Autogolpe de Estado? La realidad es que Ramos Allup dejó su cargo en enero de 2017 y Maduro sigue al frente del Gobierno revolucionario.

Estos fallidos planteamientos contaban, como siempre, con el apoyo de Estados Unidos, quien ya en 2015 le estableció un marco político declarando a través de un decreto ejecutivo firmado por el expresidente Obama como «amenaza inusual y extraordinaria». Una justificación perfecta para que, desde Washington y a través de la oposición venezolana, se pudieran poner en marcha una serie de acciones para doblegar la soberanía y autodeterminación de la República. El 12 de marzo de 2016, Barack Obama extendió por un año esta orden que sentó las bases para la política de Donald Trump.

Dentro de la mentalidad imperialista existe una campaña norteamericana, con el seguidismo de parte de la Unión Europea, para intentar desestabilizar al Gobierno venezolano: el objetivo de los Estados Unidos no es otro que hacer desaparecer al chavismo, algo que parece del todo imposible por la implantación generalizada que tiene en estos momentos; no se busca la instauración de otra fórmula electoral o cambio de modelo institucional, en su hoja de ruta solo se contempla hacer desaparecer al Gobierno y el respaldo popular que lo sustenta.

En el año 2017, con la llegada de Trump a la Casa Blanca, se intensificó la agresión de manera extrema al menos en cuanto a los métodos, ya que los objetivos son idénticos entre demócratas y republicanos: no hay diferencias en la concepción imperialista. El presidente Maduro lo define como «dos caras de la misma moneda», una amable y otra ruda. Este año significó una inflexión en la estrategia de la oposición venezolana, que encontró sustento en la radicalidad del presidente norteamericano.

Cabría remontarse unos meses atrás, a finales del año 2016, cuando tras la intervención del papa Francisco se logró instalar una mesa de diálogo y negociación con el objeto de discutir una agenda de debate político en busca de la paz. Esta quedó rota de forma unilateral tras la llegada de Trump y con la expulsión y retirada de apoyo a Jesús Alberto «Chúo» Torrealba, quien fuera el líder de la oposición en una etapa donde esta logró grandes avances políticos.

A partir de ahí empieza una época de violencia, desobediencia e intentos de golpes de Estado a través de protestas, las *guarimbas*. No fue en 2017 la primera vez en la que la derecha venezolana recurrió a actos de violencia para intentar destituir de su cargo al presidente Maduro. En 2014 un plan denominado «La salida», promovido por dirigentes como Leopoldo López y María Corina Machado, sembró el terror en las calles entre febrero y junio, tras la victoria chavista en las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013.

Con el objetivo de acabar estos ataques violentos, en los que perdieron la vida al menos 120 personas entre los meses de abril y julio del año 2017 a ma-



nos de la ultraderecha venezolana, se procedió a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que se instaló formalmente el 4 de agosto de ese año y permitió restablecer la paz.

Las fuerzas bolivarianas y la oposición volvieron a medirse en las elecciones a gobernadores del 15 de octubre de 2017, logrando el proyecto revolucionario una gran victoria en 19 de las 23 gobernaciones con un muy alto nivel de participación, aun viniéndose de un escenario de violencia. En los comicios municipales, en diciembre del mismo año, el chavismo se impuso en 307 de las 335 alcaldías con el 58 % de los votos.

En las elecciones presidenciales de 2018, Estados Unidos ya indicó, por adelantado, que no reconocería los resultados electorales, e hizo saltar por los aires la mesa de diálogo, que contaba con la participación del entonces presidente de República Dominicana, Danielo Medina, y el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y que había logrado importantes acuerdos de garantías electorales. La orden la dio directamente Rex Tillerson, secretario de Estado de los Estados Unidos, cuando el documento estaba a punto de firmarse. El interlocutor de la parte opositora era Julio Borges, quién no dudó en cumplir con los dictados del imperialismo.

Se inició desde ese momento otra fórmula para intentar la desestabilización del Gobierno: la posición de boicot electoral y la llamada a la no participación en los procesos electorales, algo que dura hasta este momento. En la primera oportunidad, las elecciones presidenciales de 2018, fracasó el experimento, y parte de la oposición se presentó a las elecciones. La participación, pese a todos los intentos, estuvo en el 48 %, y las organizaciones chavistas obtuvieron el 68 % de los sufragios, superando en más de 4 millones de votos al candidato opositor y exgobernador Henri Falcón.

El sábado 4 de agosto de 2018, durante un acto por la conmemoración de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), se produjeron varias explosiones de drones mientras Nicolás Maduro pronunciaba su discurso en la avenida Bolívar, en la capital caraqueña.

Todo intento para derrotar al chavismo ha resultado fallido hasta este momento, motivo por el que, de forma desesperada y disparatada, la administración Trump decide en 2019 «entregar» el mando para la desestabilización del legítimo Gobierno al representante, Leopoldo López, hoy protegido en España por la oligarquía financiera, de un grupo, Voluntad Popular, muy minoritario pero extremadamente violento. Del mismo modo, pasa a reconocer a Juan Guaidó como «presidente interino» de Venezuela.

Dos títeres cuyos hilos se manejan desde la Casa Blanca, pero muy bien pagados, eso sí. Podríamos decir que son líderes mediáticos de la oposición, pero muy minoritarios en Venezuela desde un punto de vista de apoyo popular; son muy estridentes a nivel mediático, pero realmente su grado de reconocimiento desde el pueblo es muy pequeño. Un liderazgo construido en redes



sociales y medios de comunicación a base de mucho dinero norteamericano. La Administración de Trump ha reconocido entregar, solo a Guaidó, 1.700 millones de dólares en dos años.

En Venezuela existe una oposición democrática, legítima, que se presenta a los comicios y que obtiene los resultados electorales que el pueblo le da, pero, en estos momentos, también se intenta desarrollar una oposición ilegítima, autonabrada, fortalecida por el apoyo internacional de Estados Unidos, que utiliza su agresión imperialista a través de una serie de personas como Juan Guaidó o Leopoldo López, que en Venezuela, insistimos, cuentan con poco respaldo y mucho menos son reconocidos como representantes legítimos en la actualidad.

La estrategia extremista y de continua violencia, además de intereses económicos, ha llevado a que la oposición venezolana se encuentre completamente fragmentada, llena de grupos y subgrupos. Una atomización de la que ha sabido aprovecharse el Gran Polo Patriótico en el que se integra el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y para muestra el resultado de las últimas elecciones a la Asamblea Nacional.

El 23 de febrero de 2019 Juan Guaidó intentó ingresar desde Cúcuta, frontera con Colombia, encabezando una supuesta caravana de ayuda humanitaria financiada por el Imperio que terminó siendo contestada por millones de venezolanos y venezolanas, que entendieron que este «teatro» suponía una injerencia a la soberanía nacional y una excusa para perpetrar un golpe de Estado. A partir de ahí se sucedieron distintos ataques terroristas a instalaciones eléctricas, sabotaje a la moneda, llamado a la división de la fuerza armada...

Llega ahora, tras la instalación de la Asamblea Nacional, un momento de paz, estabilidad, diálogo, reencuentro y reconciliación, sin intervencionismo imperialista y desde un liderazgo compartido por decenas de dirigentes que dan continuidad al proyecto bolivariano revolucionario que impulsara Hugo Rafael Chávez Frías, y que tiene por delante la reconstrucción de un país, la recuperación de una economía y un bloqueo que revertir. ★

Caracas, 11 de enero de 2021

